



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D. C., seis (6) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

RADICADO: 11001-33-35-026-2019-00428
PROCESO: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACCIONANTE: **CARLOS ANDRES OCAMPO NARANJO**
ACCIONADO: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES “IDEAM”

En el presente asunto, el señor **CARLOS ANDRES OCAMPO NARANJO** promueve demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra del **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES “IDEAM”**, con la finalidad de obtener la nulidad del acto administrativo que dispuso la terminación del nombramiento provisional y negó el reintegro al actor a la entidad demandada, esto es, Resolución No. 0792 del 27 de abril de 2016, y oficio No. 20191020001341 del 26 de marzo de 2019.

Conforme a lo anterior, y revisado el expediente, este despacho observa que no es posible avocar conocimiento de la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

En primer lugar, se debe decir que el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala la oportunidad en la cual se deben presentar las demandas, refiriéndose en el numeral 2°, literal d), específicamente a las de nulidad y restablecimiento del derecho, preceptuando lo siguiente:

“ART. 164.- Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(...)

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales.”

Sombreado fuera de texto

Visto esto, al analizar los términos en los cuales se instauró la presente demanda, se observa lo siguiente:

- Que mediante Resolución No. 00792 del 27 de abril de 2016, se dio por terminado el nombramiento en provisionalidad que ostentaba el señor Carlos Andrés Ocampo Naranjo, en el empleo Profesional Universitario Código 2044, Grado 06, OPEC 206737, del Grupo de Laboratorio de Calidad Ambiental de la Subdirección de Hidrología; y a su vez, nombra en periodo de prueba dentro de la carrera administrativa al señor Jhonatan Danilo Uasapud García, por ocupar el primer puesto en el registro de elegibles conformado a través de la Resolución No. 20162010009895 del 18 de marzo de 2016. (fls. 83-85 del medio magnético)
- A través de petición radicada ante la entidad demandada el día 19 de marzo de 2019, el señor Ocampo Naranjo a través de apoderada judicial, solicita de dicha entidad el reintegro al cargo de Profesional Universitario Grado 6 Código 2044, en las mismas o mejores condiciones de trabajo y remuneración que ostentaba hasta el 31 de mayo de 2016. (fls. 1-7 del medio magnético)
- Con oficio No. 20191020001341 del 26 de marzo de 2019, la entidad accionada da contestación a la petición elevada por el actor el día 19 de marzo de la presente anualidad, manifestándole al actor en primer lugar, que no se demostró que el señor Ocampo Naranjo condición alguna que le impide o dificulte el desempeño de sus funciones, y en segundo lugar, la desvinculación del actor se produjo de manera objetiva, atendiendo el acceso al servicio público mediante el sistema de mérito. (fls. 219-224 medio magnético)

Que según el material probatorio aportado al expediente, el apoderado judicial de la parte actora no allegó la constancia de notificación personal de la Resolución No. 0792 del 27 de abril de 2016, sin embargo, el Profesional del Derecho manifiesta en la pretensión No. 2º del escrito de la demanda, que el demandante estuvo vinculado al servicio de la entidad hasta el 31 de mayo de 2016.

De acuerdo con lo antes manifestado, se tiene que la Resolución No. 0792 del 27 de abril de 2016, concluyó una actuación administrativa por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales “IDEAM, quedando así agotado el trámite ante la entidad demandada, pues contra la misma no procedía recurso alguno, lo cual permitía que se pudiera acudir directamente ante la jurisdicción contencioso administrativo a controvertir la legalidad del acto administrativo a través del medio de control respectivo.

En este orden de ideas, se tiene, que el señor Carlos Andrés Ocampo Naranjo laboró para la entidad hasta el 31 de mayo de 2016.

Que contando a partir del día hábil siguiente a la ejecución del acto acusado, esto es, Resolución No. 0792 del 27 de abril de 2016, es decir, el 1º de junio de 2016, el accionante contaba con 4 meses para interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, feneciendo tal término el 1º de octubre de 2016, lo anterior, al tenor de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, numeral 2º literal d).

Ahora, la solicitud de conciliación fue presentada el 22 de julio de 2019 (fl. 19), y la realización de la misma fue el 10 de septiembre de 2019, es decir, **2 años y 9 meses** después de haberse ejecutado el acto administrativo objeto de Litis.

Frente a lo anterior, es claro que en el presente asunto existe caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, desde el **1º de octubre de 2016**.

En este sentido, el H. Consejo de Estado en providencia de 1º de diciembre de 2011, a través del Consejero Ponente, Dr. GERARDO ARENAS MONSALVE, dentro del expediente con radicación número 2010-00160, confirmó un auto a través del cual se rechazó la demanda, con base en los siguientes argumentos:

“2. Respecto a la caducidad en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

*Este fenómeno jurídico está fundamentado en la necesidad de señalar un plazo objetivo, **sin considerar situaciones personales**; es invariable para que aquella persona que considere que un acto administrativo vulnera un derecho, independientemente si ésta opta por demandar o no; no puede ser objeto de renuncia por la Administración, pues obra independientemente y aún contra voluntad del beneficiario de la acción; se constituye en aras de garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad de las situaciones que involucran a las autoridades administrativas.*

Al respecto, establece el numeral 2º del artículo 136 del C. C. A, subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, lo siguiente:

“La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.”

El artículo transcrito establece que la acción de nulidad y restablecimiento tiene un término de caducidad de cuatro meses contados a partir de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, dependiendo del caso. No obstante, este término no se aplica cuando se solicita la nulidad de

un acto administrativo que reconoce prestaciones periódicas, ya que éstos pueden ser demandados en cualquier tiempo.

De igual manera, el Tribunal Administrativo de Antioquia, con auto adiado 24 de julio de 2013, dentro del expediente 05001-33-33-023-2013-00300, M.P. Beatriz Elena Jaramillo Muñoz, también confirmó una decisión de rechazo de la demanda por caducidad, en los términos que a continuación se señalan, siendo bastante clara la explicación que se realiza al respecto:

“Se puede decir también que la caducidad es un fenómeno procesal en virtud del cual por el sólo transcurso del tiempo, sin que se haya hecho uso de la acción judicial, se pierde para el administrado la posibilidad de demandar el acto administrativo en vía jurisdiccional, pues así lo precisó la Corte Constitucional: “La Ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, de manera que al no promoverse la acción dentro del mismo, se produce la caducidad, ello surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener por los medios judiciales requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del estado determinado derecho; por ende la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien dentro de las oportunidades procesales fijadas por la Ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado.”

En este orden de ideas, queda plenamente demostrado que se ha configurado la caducidad del medio de control, y corolario de ello, es del caso rechazar la demanda, pues la misma se presentó por fuera de la oportunidad procesal que tenía la parte demandante para el efecto, y en este evento el artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone en su numeral 1° que se rechazará la demanda “*cuando hubiere operado la caducidad*”.

Ahora bien, y en gracia de discusión, debe decir el Despacho, que es claro que lo pretendido por el actor es revivir términos con la solicitud radicada el 19 de marzo de 2019, la cual provocó el pronunciamiento de la administración a través del oficio No. 20191020001341 del 26 de marzo de 2019, pues cabe recordar, y como se dijo en líneas anteriores, la Resolución No. 0792 del 27 de abril de 2016, se encuentra en firme, además es a partir de ésta, que se establece la controversia objeto de la Litis, pues con la misma se dio por terminado el nombramiento provisional del actor.

Aunado de lo anterior, el despacho advierte que conforme a la certificación emanada de la Procuraduría 144 Judicial II para asuntos Administrativos, en la cual se indicó que la solicitud de conciliación fue presentada el 22 de julio de 2019 (fls.19), había transcurrido un lapso superior a **2 años**, circunstancia por la cual se evidencia que dicho procedimiento se surtió a pesar de haberse

configurado el fenómeno jurídico de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; hecho que no fue valorado por la señora Procuradora delegada omitiendo el análisis exigido por el ordenamiento jurídico en el Decreto 1065 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único del Sector Justicia y del Derecho, el cual consagra que no puede adelantarse el procedimiento de conciliación extra judicial en los siguientes eventos:

“Artículo 2.2.4.3.1.1.2. Modificado Art.1 Decreto 1167 de 2016 Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de los medios de control previstos en los artículos 138, 140 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo:

**** Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.***

**** Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.***

**** Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.”***

Negrillas del Despacho

No podía entonces la señora Procuradora 144 Judicial II para asuntos Administrativos adelantar el trámite conciliatorio puesto que el medio de control se encontraba caducado; sin embargo no se hizo reparo alguno frente a esta situación y tampoco se adoptaron las medidas conducentes para conjurar la presentación de una demanda que como ya se ha expresado ha caducado.

Así las cosas se concluye, en primer lugar que el acto administrativo Resolución No. 0792 del 27 de abril de 2016, se encuentra en firme, y en virtud de ello el actor no puede pretender revivir términos con la nueva petición la cual fue radicada en el año 2019; y en segundo lugar, que sobre la resolución en comento recayó el fenómeno jurídico de la caducidad no siendo pasible de control jurisdiccional, lo que quiere decir que tiene fuerza ejecutoria, y por ende es de obligatorio cumplimiento.

Corolario de todo lo expuesto, se deberá rechazar la presente demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad del medio de control, tal como quedará anotado en la parte resolutive de este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Despacho,

R E S U E L V E:

PRIMERO.- RECHAZAR POR CADUCIDAD la demanda interpuesta por el señor **CARLOS ANDRÉS OCAMPO NARANJO**, en contra del **INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES "IDEAM"**, conforme lo manifestado en la parte motiva de este proveído.



SEGUNDO.- Remítase copia de la presente providencia a la señora Procuradora 144 Judicial II para asuntos Administrativos de la Procuraduría General de la Nación.

TERCERO.- Ejecutoriada la presente providencia, previas las anotaciones a que haya lugar, devuélvanse a la parte demandante los anexos sin necesidad de desglose y a través de la Oficina de Apoyo procédase al archivo correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

FV

<div style="text-align: center;"> JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. Por anotación en ESTADO ORDINARIO notifico a las partes la providencia anterior hoy 9 DE DICIEMBRE DE 2019, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)  LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA</div>
